

LOS INMIGRANTES EN LA EUROPA DE LOS «NUEVE»

LA reciente visita al Eliseo de Abdelaziz Buteflika, ministro argelino de Asuntos Exteriores, portador de un mensaje del presidente Bumedien para Pompidou, ha servido para subrayar nuevamente el carácter acuñante de los problemas planteados por el empleo de mano de obra extranjera. Por encima de las discusiones sobre el conjunto de las relaciones franco-árabes un mes después del atentado de Marsella, Argelia hace hincapié en que doce años de independencia le dan pleno derecho a reclamar, para sus súbditos, condiciones de vida más decentes, una protección más eficaz y una seguridad más concreta a cambio de la ayuda aportada a los países más ricos por los trabajadores tercermundistas. En un momento en que una doble crisis —la de la energía, la de la inflación— amenaza más directamente a las categorías menos favorecidas, se hace patente una toma de conciencia colectiva por parte de los «pañoleros de Europa».

La emigración a Europa es un fenómeno histórico, sobre todo por lo que respecta a Francia. Más recientemente se ha convertido en un fenómeno económico. Hasta la primera guerra mundial, las emigraciones seguían la dirección viejo continente, América, y tenían además un carácter definitivo. Posteriormente, las conmociones políticas y sociales, la crisis de 1929 y el subsiguiente paro fomentaron las tendencias proteccionistas. En el momento de la liberación, la Europa que había quedado exangüe por culpa del conflicto mundial se encontró sin mano de obra. Se hizo un llamamiento a los países semi-industrializados del Mediterráneo. Los italianos comenzaron a abandonar el Mezzogiorno con rumbo a las minas de Valonia; los españoles y los portugueses, a dispersarse por toda la Europa occidental para participar en su reconstrucción. Por último, los yugoslavos fueron reclutados por las distintas industrias, en especial las mecánicas. Esta primera ola fue seguida por un flujo migratorio —igualmente importante— de súbditos de antiguas colonias: los del Magreb y del África negra, con destino a Francia; los de la In-

dia, el Pakistán o Jamaica, con dirección a Gran Bretaña. Los turcos a su vez se dirigían principalmente hacia Alemania, con la cual su país mantenía estrechos vínculos, convirtiéndose así, gracias a su sutil eufemismo, en *Gastarbeiter*: «trabajadores invitados».

¿Cuántos son estos «invitados» en la Europa de los «Nueve»? Las estadísticas siguen siendo imprecisas. Según los cálculos franceses, los trabajadores extranjeros son más de seis millones en los países de la Comunidad, y más de diez millones si contamos también a sus familias. En Bruselas se aventura la cifra de catorce millones, pero en ella se incluyen países como Austria, Noruega, Suecia y Suiza, que no forman parte del Mercado Común. Una cosa es cierta: esta masa alógena representa por lo menos el 10 por 100 de la pobla-

ción activa europea. Figura, por su número, en el sexto lugar de los pueblos de la Comunidad, por delante de Bélgica, Dinamarca, Irlanda y Luxemburgo. Los inmigrantes son, en resumidas cuentas, el décimo «partner» de la Europa occidental.

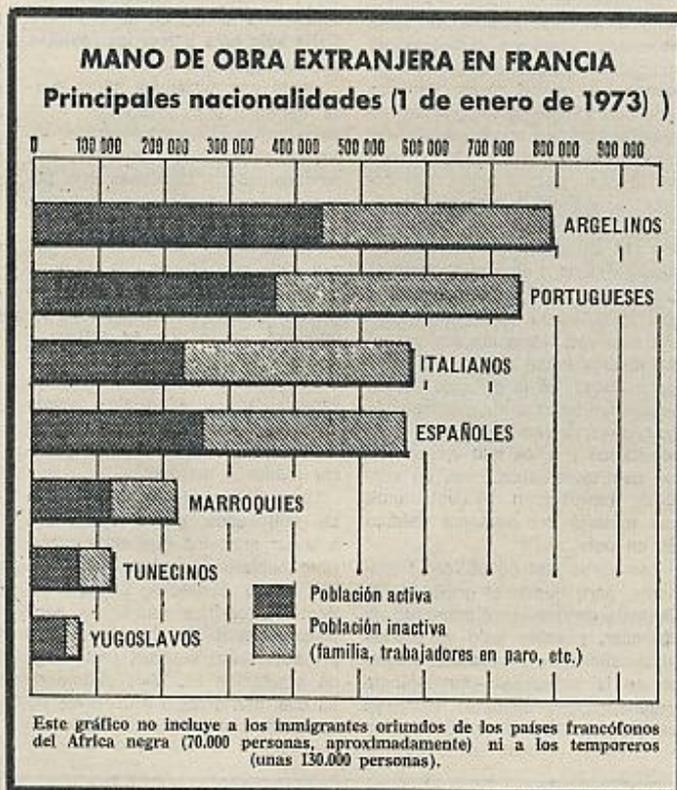
Hasta los últimos años se había venido observando un equilibrio, aunque en una sola dirección. Los países industrializados, con poblaciones envejecidas, podían compensar el coste cada vez más elevado de su fuerza de trabajo autóctono mediante la utilización de una masa de asalariados procedentes de países de demografía galopante, pero carentes de una infraestructura económica. Habitados a una existencia precaria, todos aquellos trabajadores se veían sometidos sin defensa posible al poder discrecional de las autoridades locales y del patronato en las metró-

polis industriales. El origen étnico, geográfico y social de los inmigrantes, la condición subproletaria de esa mano de obra de apoyo, contribuyó al falseamiento del juego de la oferta y la demanda y dificultó la definición y aplicación de un contrato equitativo entre el patrono, tantas veces anónimo, y el recién llegado, mal orientado, mal albergado, mal pagado, sometido a todo tipo de molestias administrativas y policíacas, enajenado por toda una serie de legislaciones nacionales hipócritas y complejas.

En este dominio, como en tantos otros, Europa sigue renqueando. Sus gobiernos no han conseguido —y éste es sólo un ejemplo— armonizar los sistemas de pago de las prestaciones familiares a los inmigrantes, sobre todo a las familias que no residen en el territorio del país de acogida. En diversos países europeos, los inmigrantes sólo se benefician en parte de las ventajas sociales concedidas a los trabajadores nacionales. ¿Y qué decir de los innumerables «clandestinos» que durante años han podido penetrar de modo fraudulento en la Tierra prometida europea?

Esta situación, generadora de conflictos, debía provocar un fenómeno de rechazo, de ostracismo mutuo, que se hizo patente mucho antes de que se comenzase a hablar de los fedayin y del bloqueo petrolero. Las soluciones buscadas por ciertos gobiernos no siempre han dado los frutos apetecidos. Los factores políticos, las tensiones raciales suscitadas por la presencia de fuertes minorías étnicas extranjeras en las regiones industriales, corroboran los argumentos de los que, cada vez más numerosos, exigen una limitación de la inmigración. La crisis económica, las perspectivas de paro, ya han conducido al gobierno de Bonn, después del de Copenhague, a tomar decisiones en este sentido.

¿Serán los inmigrantes las primeras víctimas de la inflación? Las reacciones del francés medio —si no de la mayoría de sus congéneres europeos— hacen pensar que el medio industrial, en período de dificultades sociales, vuelve





El primero de enero de 1973 había en Francia 571.000 inmigrantes españoles. De ellos, 260.000 estaban ocupados. El resto lo componían familiares de esos trabajadores.

Jean Benoit

pronto a encontrar los viejos surcos del «chauvinismo» y del egoísmo nacional. De ningún modo demuestran que el mismo francés medio, el mismo europeo, estén dispuestos a ocuparse mañana de ciertos trabajos duros y repugnantes.

Los trabajadores extranjeros parecen, en cualquier caso, cada vez menos dispuestos a soportar como hasta ahora la injusticia y la explotación. En Francia sobre todo, las campañas de protesta contra la arbitrariedad policíaca, contra la circular Fontanet que reglamenta las condiciones de residencia de determinadas categorías de inmigrantes, las huelgas de la O. S., la participación masiva de los trabajadores extranjeros en los desfiles del 1 de mayo en torno al tema de la igualdad de los derechos sociales, son los primeros signos de una participación de los emigrantes en la vida sindical, si no política, del país que los acoge.

FRANCIA: Una toma de conciencia

Población extranjera: De una población extranjera calculada en 3.775.800 personas el 1 de enero de 1973 (el 7 por 100 de la población total de Francia), el número de trabajadores activos se estima en 1.800.000 personas (el 8 por ciento de la población activa). El 1 de enero de 1973, esa pobla-

ción estaba compuesta por 798.000 argelinos (440.000 activos), 742.000 portugueses (370.000 activos), 573.000 italianos (230.000 activos), 571.000 españoles (260.000 activos), 218.000 marroquíes (120.000 activos), 119.000 tunecinos (70.000 activos) y 68.000 yugoslavos (50.000 activos).

Según una encuesta del Ministerio de Trabajo efectuada en 1971, la proporción de asalariados extranjeros en establecimientos con diez asalariados o más alcanzaba un 27 por 100 en los sectores de la construcción y obras públicas, un 17 por 100 en la producción de metales y 16 por ciento en las industrias de extracción. En la industria automovilística, de bicicletas y reparación, su número se elevaba, en 1973, a 530.000, aproximadamente, para la totalidad de Francia. De esta cifra, cerca de 200.000 trabajaban en la rama del automóvil en la región parisina, donde representaban entre el 30 y el 40 por 100 de la mano de obra y el 46 por 100 del total de obreros especializados. En la Renault, los 21.500 trabajadores inmigrantes representan actualmente entre el 22 por 100 del personal y el 30 por 100 de los obreros.

La población extranjera está concentrada especialmente en la región parisina (1.364.602 personas el 1 de enero de 1973), en la región del Ródano-Alpes (cuatrocientas ochenta y nueve mil quinientas once personas) y la Provenza-Costa Azul (391.132 personas). La proporción de extranjeros rebasa el 12 por 100 en la re-

gión parisina, el Ródano, Isère, los Alpes Marítimos, los Pirineos Orientales y Mosela.

Condiciones de residencia en el país: Los trabajadores extranjeros tienen una gran diversidad de estatutos. Único denominador común: los súbditos extranjeros no gozan en Francia de derechos incondicionales de trabajo. En aplicación de la disposición del 2 de noviembre de 1945, texto de base para todo lo relativo a esta materia, los súbditos de otro país no pueden trabajar en territorio francés más que si son titulares de un contrato visado por los servicios del Ministerio de Trabajo. Antes de conceder su visado, esos servicios se cercioran de que el puesto ofrecido corresponde a un empleo real, remunerado normalmente, y que no hay candidatos franceses al mismo.

Por una disposición de 1945 se creó la Oficina Nacional de Inmigración (ONI), que pasó a ocuparse, a título de monopolio, del reclutamiento y la entrada en Francia de los trabajadores extranjeros sobre la base del contrato visado por los servicios exteriores del Ministerio de Extranjero.

Sin embargo, no todos los extranjeros están sometidos al estatuto de la ONI. En aplicación de ciertas convenciones internacionales, los súbditos de países miembros de la Comunidad Económica Europea, los argelinos, los súbditos de los Estados francófonos del África negra antes vinculados a Francia gozan de un estatuto privilegiado, por lo menos en teoría.

Por una circular del ex ministro de Trabajo, M. Fontanet, el 23 de febrero de 1972 se unificaron los trámites de concesión del permiso de residencia y de la carta de trabajo. Una circular de Marcellin, ministro del Interior, reglamentaba su aplicación. Después resultó que la concordancia de los permisos de residencia y de las autorizaciones de trabajo presentaba dificultades. Por circular del 11 de julio de 1973, el ministro de Trabajo, Empleo y Población, M. Gorse, hizo saber que el Ministerio del Interior concedería en adelante, a todos aquellos trabajadores que se encontrasen sin trabajo en el momento en que expirase su permiso de residencia, una autorización temporal de residencia en el país de tres meses.

En materia sindical, desde la votación de la ley de 27 de junio de 1972, los trabajadores extranjeros son electores y elegibles para las funciones de delegados del personal y de miembros de los comités de empresa.

En el terreno social se votaron dos leyes en el Parlamento contra las empresas de contratación y alojamiento de mano de obra. Los créditos destinados al alojamiento de los inmigrantes, a la acción social en su favor y a su formación profesional se incrementaron en un 16 por 100 en 1974 con relación a 1973. Se ha llevado a cabo un esfuerzo especial, sobre todo en el campo de la formación permanente.

LOS INMIGRANTES EN LA EUROPA DE LOS "NUEVE"

Cuatro hechos nuevos

La política francesa de inmigración ha reflejado, en estos últimos meses, tendencias y también tensiones a menudo contradictorias: liberalismo del Ministerio de Trabajo e intransigencia del Ministerio del Interior en la aplicación de una nueva reglamentación relacionada con los extranjeros reclutados por la ONI (circular Fontanet); necesidad de una mano de obra de apoyo, deseada por el gran patronato, y condiciones de vida impuestas a esa misma mano de obra por numerosos jefes de empresa; amenazas globales de paro y necesidades por sectores.

Se han observado cuatro fenómenos nuevos en el sector de la inmigración: la resistencia a la arbitrariedad administrativa y policíaca; el compromiso creciente de los inmigrantes en las luchas obreras; la aparición de tensiones raciales y políticas entre las minorías de trabajadores extranjeros y algunos sectores de la población autóctona; el espectro del paro. En Valence, La Ciotat, La Rochelle, Aix-en-Provence o París, las huelgas de hambre de los inmigrantes dieron lugar al nacimiento de comités de apoyo. Al mismo tiempo se hacía patente una dramatización de las relaciones entre los inmigrantes que, al no poder obtener un contrato de trabajo, se veían amenazados de expulsión y las autoridades encargadas de hacer respetar la nueva reglamentación. Por último, la suerte de ciertas categorías de inmigrantes despedidos bruscamente —sin que los patronos tuviesen en cuenta para nada las consecuencias del despido para esos hombres y sus familias— demuestra claramente cuáles eran las lagunas de la nueva reglamentación. Los inmigrantes pasaron entonces de la huelga de hambre a la ocupación de las oficinas de contratación de mano de obra y a las manifestaciones callejeras.

Estas manifestaciones no han contribuido poco a aumentar la resistencia o, si se quiere, el simple afán de dignidad de los trabajadores extranjeros. La represión de que fueron víctimas —debido precisamente a la acumulación de casos de infracción de la nueva reglamentación— explica perfectamente esa combatividad que se ha traducido en las huelgas de Boulogne-Billancourt, Penarroya, Girosteel y, más recientemente, la de Cables de Lyon, cuyo lema era: «A trabajo igual, salario igual».

En el verano de 1973, Gorse concedió una moratoria para la aplicación de las circulares Fontanet y Marcellin. El primero de noviembre, éstas —aunque enmendadas por Gorse— entraron plenamente en vigor.

Un caso particular, el de los trabajadores argelinos, todavía no ha encontrado solución. Tras los graves incidentes raciales de Marsella, la decisión de Bumedien de suspender la emigración dirigida a Francia, en plena crisis petrolera, cogió por sorpresa a las autoridades francesas. Dicha decisión ha tenido el mérito de llamar más la atención sobre las responsabilidades de los países importadores de mano de obra.

ALEMANIA FEDERAL: Los «Gastarbeiter»

Población extranjera: Tres millones seiscientos mil personas, aproximadamente, en 1973 (5,9 por ciento de la población total); de ellos, 2.345.000 activos (un 8 por ciento de la población activa del país). Los inmigrantes representan un 25 por 100 de los trabajadores de la construcción, un 20 por 100 de los ocupados en el sector de la restauración y casi un 80 por 100 de los efectivos de ciertos sectores de obras públicas. En 1972, los 302.595 recién inmigrantes se repartían del siguiente modo (en estas cifras se incluyen sólo trabajadores de países no pertenecientes al área del Mercado Común): 96.210 turcos, 75.501 yugoslavos, 28.657 españoles, veinticuatro mil seiscientos sesenta y seis griegos, 16.476 portugueses, 4.003 marroquíes, 1.921 tunecinos; otras nacionalidades, incluidos daneses, irlandeses y británicos: cincuenta y cinco mil ciento sesenta y uno.

Condiciones de residencia: Desde hace poco tiempo, quienes emplean a inmigrantes «legales» pueden ser penados con multas de hasta 24.000 pesetas por obrero. La mayoría de los extranjeros tienen la intención, en el momento de su llegada a Alemania Federal, de regresar a sus países de origen después de dos o tres años. Pero esa actitud se modifica posteriormente: un 50 por 100 de los inmigrantes llevan más de cinco años instalados en Alemania, un 90 por 100 no se proponen volver a corto plazo, un 23 por 100 están dispuestos a quedarse en Alemania más de siete años.

La ley sobre extranjeros, que entró en vigor en 1965, preveía ya la posibilidad de obtener un permiso de residencia de larga duración. Desde febrero de 1973, los inmigrantes que llevan por lo menos cinco años residiendo en Alemania pueden beneficiarse de un permiso de residencia de duración ilimitada. Este aparente liberalismo va, sin embargo, acompañado de un control más estricto de las entradas de trabajadores.

El pasado noviembre, Bonn prohibió, hasta nueva orden, la entrada de nuevos trabajadores extranjeros. Por otro lado, el permiso de residencia de numerosos «Gastarbeiter» —«trabajadores invitados»—, la mayoría de nacionalidad turca, no ha sido renovado.

La acogida a los trabajadores extranjeros está mejor organizada en la República Federal que en Francia. Sin embargo, una reciente encuesta ha demostrado que el 85 por 100 de las familias extranjeras del Ruhr viven en inmuebles viejos y pagan, con relación a la familia alemana media, un tercio suplementario de alquiler por la mitad de superficie por habitante. Estas desigualdades están compensadas por los salarios, relativamente elevados, pero las jornadas de trabajo alcanzan a veces las diez o doce horas.

ción activa del país. Los trabajadores no comunitarios que entraron en 1972 se distribuyen del siguiente modo: 992 marroquíes, 593 españoles, 589 turcos, 269 argelinos, 250 portugueses, 187 yugoslavos, 155 tunecinos, 300 griegos, 1.386 súbditos de otros países.

Condiciones de residencia: Durante largo tiempo, Bélgica ha sido un país particularmente acogedor para los inmigrantes, sobre todo en Valonia, donde se integran fácilmente. Recientemente, ciertos municipios obreros han creado, a instancias de la central metalúrgica de Lieja, organismos consultivos de los inmigrantes encargados de examinar conjuntamente con los representantes de las autoridades comunales, los problemas de los trabajadores extranjeros. Sin embargo, a partir



Los trabajadores extranjeros en la CEE superan los seis millones, y suman más de diez millones si contamos también a sus familias.

BELGICA: El fin de la hospitalidad

Población extranjera: Setecientos veinte mil personas, según el censo de 1971, es decir, el 7 por ciento de la población: 220.000 trabajadores extranjeros activos, es decir, el 7,2 por 100 de la pobla-

de principios del año pasado, las autoridades belgas decidieron a su vez frenar la inmigración debido, sin duda, al aumento del paro en las regiones industriales. Los trabajadores extranjeros que llegan a Lieja o Bruselas y no pueden demostrar que tienen trabajo, son, en muchos casos, expulsados del país.



La condición subproletaria de los inmigrantes ha contribuido al falseamiento del juego de la oferta y la demanda.

DINAMARCA:

Oposición de los sindicatos

Población extranjera: El número de súbditos de países no comunitarios que tenían un permiso de trabajo vigente a fines de diciembre de 1972 se calculaba en 25.000, cifra que se desglosaba en 4.800 turcos, 4.300 yugoslavos, 2.000 paquistaníes, 1.300 súbditos de los países del Magreb, 12.600 inmigrantes de otras nacionalidades. En 1973 fueron censados treinta mil trabajadores extranjeros en este país, que sólo cuenta cinco millones de habitantes. En esa cifra de 30.000 se incluyen los trabajadores originarios de la Comunidad Económica Europea y los de los otros países escandinavos, que, incluso después de que Dinamarca se adhiera al tratado de Roma, conservaron el privilegio de no tener que solicitar un permiso de residencia y de trabajo para poder encontrar un puesto.

Condiciones de residencia: Dinamarca ha sido, estos últimos años, el país europeo con el más bajo porcentaje de trabajadores extranjeros con relación a la cifra total de población. Los dirigentes de Copenhague han practicado una política muy restrictiva durante la posguerra para responder a los deseos de los sindicatos locales, que no han visto nunca con buenos ojos las implantaciones de mano de obra no nórdica, incluso cuando ésta no hacía directamente la competencia a sus militantes.

El pasado verano, presionado por los industriales, el gobierno se avino a conceder para el año 1974 seis mil permisos de trabajo a obreros extranjeros. La crisis del petróleo, sin embargo, obligó a un replanteamiento de esa política «aperturista»: tras la guerra del Kippur, los responsables daneses prohibieron *sine die* toda nueva entrada de trabajadores en ese reino.

Actualmente, los sindicatos, atemorizados por el fantasma del paro, piden que se expulse del país incluso a los turcos y yugoslavos que tienen permiso de residencia y algunos de los cuales llevan ya años viviendo en el país. Los sindicatos han propuesto que se empiece al menos por los solteros y que se concedan moratorias, mientras se ve cómo solucionar la situación a los trabajadores extranjeros casados con danesas o a aquellos que se han traído al país a sus familias.

GRAN BRETAÑA:

Los «coloured»

Población extranjera: Dos millones seiscientos mil inmigrantes, aproximadamente (un 4,7 por 100 del total de población); un millón setecientos ochenta y dos mil activos en 1971 (el 7,3 por 100 de la población activa del país). Los trabajadores que entraron en el país en 1973 y solicitaron permiso permanente se reparten del modo siguiente: 6.025 españoles, mil

seiscientos veintitrés portugueses, 950 yugoslavos, 358 turcos, 203 marroquíes, 26.031 súbditos de otros países, entre ellos numerosos trabajadores de la antigua Commonwealth, y sin que en esta última cifra se incluyan los súbditos de los demás países miembros de la Comunidad Económica Europea.

Condiciones de residencia: La presencia de, aproximadamente, 1.500.000 «ciudadanos de color» le plantea al país el «más grave problema de inmigración de la Comunidad Económica Europea». Las nuevas disposiciones de la ley sobre la inmigración entraron en vigor el 30 de enero de 1973. Estas nuevas disposiciones flexibilizan de modo notable las condiciones de entrada en el país de los ciudadanos blancos de la Commonwealth, pues dan derecho a instalarse libremente en Gran Bretaña a aquellas personas que tienen un abuelo —y ya no como antes, sólo un padre— ciudadano británico. Ha surgido una controversia sobre si esta «liberalización» se aplica únicamente a los hijos legítimos o no: afecta, sobre todo, a entre 50.000 y 100.000 anglo-indios.

HOLANDA: El veto de la izquierda

Población extranjera: Aproximadamente, 200.000 personas en 1973, es decir, menos del 2 por ciento de la población; 125.000 activos en 1972, es decir, el 3,2 por ciento de la población activa del

país en ese mismo año. Los trabajadores oriundos de países extracomunitarios que entraron en el país en 1972 se distribuyen del modo siguiente: 3.211 españoles, 2.564 turcos, 2.095 yugoslavos, 626 mogrebíes, 431 portugueses, 241 griegos y 6.671 súbditos de otros países.

Condiciones de residencia: Las dos terceras partes de los inmigrantes oriundos de las antiguas colonias holandesas del Caribe e Indonesia no vuelven ya a sus países de origen. Se ha abierto un gran debate sobre el problema de la mano de obra extranjera. Los medios económicos abogan por un incremento de esa fuerza de trabajo extranjera. La izquierda política, por el contrario, se inclina por una reducción del número de trabajadores extranjeros acompañado de una revisión de las relaciones con el tercer mundo, de un replanteamiento del problema del crecimiento económico y de investigaciones destinadas a hacer más atractivos para los holandeses los trabajos manuales.

IRLANDA

Irlanda tiene uno de los índices de paro más elevados de la Comunidad Económica Europea (un 7 por 100, aproximadamente); la inmigración es prácticamente inexistente. El único problema en ese sector es el de la repatriación de los emigrantes irlandeses, muy numerosos en Gran Bretaña: 200.000, aproximadamente.

ITALIA

Junto con Dinamarca e Irlanda, Italia tiene uno de los más débiles índices de inmigración de la Comunidad Económica Europea. En 1972 entraron en el país 2.149 trabajadores yugoslavos con permiso de residencia permanente, 1.084 portugueses, 625 españoles, 186 griegos, 100 turcos y siete mil seiscientos sesenta y dos procedentes de otros países.

La mano de obra industrial no especializada se recluta esencialmente en el «Mezzogiorno» o Sur del país.

LUXEMBURGO

Población extranjera: En 1972 entraron en el Gran Ducado tres mil ciento ochenta y cuatro trabajadores extranjeros. Esta cifra, en la que no se incluyen los oriundos de la antigua Europa de los «Seis», se desglosa así: 2.336 portugueses, 305 españoles, 198 yugoslavos, 4 griegos y 333 súbditos de otros países. ■ © «LE MONDE». Publicaciones Controladas.